

# COMENTARIOS AL PROYECTO DE “INOCENCIA FISCAL”. UN BLANQUEO ENCUBIERTO



¿Es útil? (2) (0)

Juan M. Álvarez Echagüe  11/06/2025

## SUMARIO:

Se analiza el proyecto de ley denominado “principio de inocencia fiscal”, la cual incluye reformas al Régimen Penal Tributario, la ley de procedimiento tributario y el Código Civil y Comercial de la Nación, además de introducir un Régimen de Declaración Jurada Simplificada en el impuesto a las ganancias. El autor describe el proyecto como un mecanismo que permitiría legalizar fondos no declarados; asimismo, menciona que no se prevé una amnistía para delitos tributarios y cambiarios, lo que podría generar incertidumbre jurídica. El autor sugiere que la aprobación del proyecto en su forma actual podría ser compleja y que generaría futuros debates.

## Esta doctrina fue publicada en:

- Doctrina Penal Tributaria y Económica ERREPAR

“Inocencia fiscal” o “principio de inocencia fiscal”. Así fue titulado el proyecto de ley en la presentación que, desde la Casa Rosada, realizaron el diputado Espert y el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, el jueves pasado, 5 de junio.<sup>[1]</sup>

El proyecto contiene reformas al [Régimen Penal Tributario \(LPT\)](#), a la [ley de procedimiento tributario \(LPTP, L. 11683\)](#) y al [Código Civil y Comercial de la Nación](#) (en materia de prescripción) e instaurando el Régimen de Declaración Jurada Simplificada en el impuesto a las ganancias (DSIG).

Más allá de la denominación coloquial que le diera el diputado Espert, el proyecto de inocente no tiene nada, sino que el objetivo buscado es instaurar un neoblanqueo o blanqueo encubierto, como pretendo explicar más adelante.

Si bien el título evoca una aparente vocación garantista o protectora de los contribuyentes, el proyecto encierra una arquitectura normativa que, en su conjunto, lejos de fortalecer el principio de legalidad o de inocencia en materia tributaria, apunta a instaurar de manera solapada un nuevo mecanismo de regularización patrimonial.

El antecedente directo es el [decreto \(PEN\) 353/2025](#) y las [resoluciones generales \(ARCA\) 5696, 5697, 5698 y 5699](#), además de la [resolución \(UIF\) 78/2025](#).

El decreto establece el Sistema de Finanzas Abiertas, instaura la DSIG, simplifica los procedimientos relacionados con inversión y adquisición de bienes y a tales fines instruye a la Unidad de Información Financiera (UIF).

El Fisco Nacional establece, por un lado, que los sujetos obligados (art. 20, L. 25246) deberán abstenerse de requerir a sus clientes las declaraciones juradas de impuestos, se elimina el Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles (COTI), se eliminan regímenes informativos (compraventa de vehículos usados, CITI de los escribanos, servicios de energía, agua, gas y telefonía fija y móvil y

expensas) y, finalmente, elevó los parámetros a partir de los cuales se debe reportar en el régimen de información que aplica para ciertas compras con tarjetas, extracciones en efectivo, transferencias bancarias, entre otras operaciones financieras incluidas en el Sistema Informativo de Transacciones Económicas Relevantes (SITER).

En línea con ello, el miércoles 4 de junio se emitió la normativa de la UIF por la cual se elevan los montos y relajan controles y obligaciones de documentar en los regímenes de información vinculados a los depósitos en efectivo en las instituciones bancarias y financieras, registración de automotores e inmuebles y las obligaciones de informar de los escribanos. Adelanto que es muy probable que esto incremente exponencialmente los reportes de operaciones sospechosas (ROS) al no contar los sujetos obligados con operaciones que puedan resultar inconsistentes.

No caben dudas: este conjunto de medidas tiene como objetivo facilitar el uso y la circulación de los dólares atesorados en el colchón por los habitantes de nuestro país, lo que el ministro Luis Caputo expresó del siguiente modo: ***“Venimos a devolverles la libertad de sus ahorros”***, agregando: *“En los últimos veinticinco años Argentina pasó a duplicar su nivel de gasto. Se llegó a un nivel de locura, que a la gente se le hace insoportable lidiar con todos esos controles”* lo que *“hizo que más gente se vaya a la informalidad. No podemos seguir financiando este déficit con suba de impuestos”*. Y en línea con lo que expresan las normas ya dictadas, y que encubre el proyecto de ley, agregó: ***“Necesitamos que la economía se remonetice: que haya más dinero. Nos da lo mismo que se produzca en pesos o en dólares, porque hay competencia de monedas”***[2]. Más claro, imposible.

*Pese a contener algunos avances técnicos valorables -como la actualización de umbrales de punibilidad, reducción del plazo de prescripción y unificación en todo el territorio, cierta desburocratización y la introducción de ciertos criterios de simplificación-, el proyecto evidencia una marcada orientación recaudatoria, carente de una visión estructural del sistema tributario y penal tributario argentino.*

## I - SOBRE LAS MODIFICACIONES AL RÉGIMEN PENAL TRIBUTARIO

### 1. Sobre los umbrales

No caben dudas, y así lo sostuve en innumerables oportunidades y lo hemos debatido en el seno del Observatorio de Derecho Penal Tributario que dirijo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, de que era absolutamente imprescindible *actualizar los montos* (umbrales de punibilidad) de la [ley 27430 penal tributaria \(LPT\)](#) que estaban vigentes desde 2017. Este aspecto de la reforma que se propone es incuestionable, y está en línea con varios proyectos que circulaban por el Congreso Nacional.

No era sostenible que una persona fuera sometida a un proceso penal tributario por diferencias superiores al millón y medio de pesos (USD 1.300 aprox.), por lo cual elevar dicha suma a \$ 100.000.000 parece algo razonable, considerando que en la segunda versión de ley penal tributaria ([L. 24769](#) de 1997) eran USD 100.000 (regía la paridad un dólar igual a un peso). La evasión agravada pasa a tener como piso \$ 1.000.000.000, manteniéndose la correspondencia de diez veces el monto para configurar la evasión simple.[3]

Un dato menor, pero que sería bueno poder conocer para entender, son las pautas de actualización que se han utilizado, pues en los artículos (1, 2, 4, 5, 6, 7 y 10) en los que se reformulan los montos, los índices son diferentes, sin surgir una explicación de ello en el mensaje de elevación.

Lo que sí es relevante es la enorme oportunidad que se desaprovecha: dejar de utilizar el “valor pesos” para fijar los umbrales para que se configuren los delitos y adoptarse criterios más eficientes y desprendidos de las erosiones por inflación. Bastaba, simplemente, por ejemplo, seguir la reforma introducida el año pasado en materia de lavado de activos (L. 27739), que estableció parámetros vinculados a salarios mínimos vitales y móviles (SMVM), y en línea con los proyectos de reforma del Código Penal, sobre lo cual el Observatorio de Derecho Penal Tributario se ha expedido favorablemente[4]. Incluso, podría haberse considerado la implementación efectiva de la unidad de valor tributaria (UVT).

Vale aclarar que si se recurriera a este mecanismo, debería revisarse bien la redacción de la norma, para no caer en los problemas que arrojó la [ley 27739](#) al referir “*siempre que su valor supere la suma de ... al momento de los hechos*”, pues esto ha generado interpretaciones desfavorables al combinar normas de forma indebida, desde mi perspectiva. Tal vez, bastaría con sostener en alguna cláusula transitoria de la reforma que el criterio a utilizar, sea SMVM o UVT, implica desincriminación de los delitos cometidos con anterioridad a la modificación, tal como sostuvo el titular de la ARCA: “*En el primer esquema, se modificarán los umbrales por los cuales el Estado podía perseguirte por evasión*”, agregando que “*para ponerlo en números, significa que, de unas siete mil causas abiertas hoy en el fuero penal tributario, únicamente quedarán en curso aproximadamente doscientas que son las que implican una evasión real y significativa*”.[\[5\]](#)

La Argentina sigue viviendo un proceso inflacionario elevado, con proyecciones de una inflación superior al 45% en 2025 (conforme *FocusEconomics*), mayor al 15% y al 10% en 2026 y 2027, respectivamente, con lo cual, el impacto en los montos fijados en pesos, de aprobarse el proyecto, muy pronto sufrirá una erosión importante, debiendo ser nuevamente actualizados en el corto plazo si no se quiere revivir los problemas que, con este proyecto, en materia de umbrales mínimos, se pretenden solucionar.

Y esta cuestión del mecanismo para definir los umbrales tiene impacto directo en la aplicación del principio de ley penal más benigna, la que ya ha tenido el suficiente trato por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Palero” y, más recientemente, en las causas “Vidal, Matías” y “Caravetta”, en relación con la mera actualización de los montos en pesos fijados en las normas penales, no dejando dudas sobre su irrestricta vigencia. Su fijación en SMVM -o utilizando la anquilosada UVT- podría zanjar el debate.

## **2. ¿Nuevo? mecanismo de la extinción de la acción penal. Restricción a la reparación integral**

El proyecto contempla, además, la derogación del actual régimen de *extinción de la acción penal* por cancelación de las obligaciones evadidas (art. 16, L. 27430) instaurando uno nuevo[\[6\]](#), cuyo eje central pasa a ser la obligación del Fisco Nacional de no formular (realizar) la denuncia penal cuando dichas obligaciones, con sus intereses, fueran canceladas en forma incondicional y total antes de que sea efectuada, estableciendo que ese beneficio se otorgará por única vez por cada persona humana o jurídica. Este mecanismo solo opera en los casos de los delitos de evasión simple o agravada de tributos y de recursos de la seguridad social (arts. 1 y 2, 5 y 6) y aprovechamiento indebido de beneficios fiscales (art. 3), quedando excluidos los delitos de apropiación indebida (de tributos -art. 4- y recursos de la seguridad social -art. 7-, en línea con lo que prevé el texto vigente).

Para el caso de que la acción penal se hubiera iniciado (no es lo mismo que la denuncia ya se hubiera efectuado), el proyecto reflota el primer párrafo del artículo que se pretende sustituir, estableciendo que la acción se extinguirá si se aceptan y cancelan incondicionalmente las obligaciones con más sus intereses, agregando que, además, deberá abonarse un 50% más del total de dicha suma dentro de los treinta días hábiles posteriores a la declaración indagatoria para que opere la causa extintiva.

Más allá del enroque de párrafos entre el proyecto y la ley vigente, parece quedar claro ahora que, como sostengo hace tiempo[\[7\]](#), la dispensa de denunciar no es sino un mandato al Fisco.

Ahora bien, el proyecto limita el uso del ejercicio por única vez al instituto de la no formulación de denuncia penal, pero deja abierto su uso reiterado para las personas humanas y jurídicas en caso de extinción de la acción por pago en el marco del proceso penal. Parece ser, una vez más, un yerro producto de la incoherencia y pésima técnica legislativa, inspirada en el “principio de inocencia fiscal”.

No se entiende el porqué de la modificación, salvo para agregar un recargo para las extinciones en el marco del proceso penal, por el solo hecho de que se haya realizado la denuncia e instado la acción penal. O, tal vez, para permitir que, en estos casos, se pueda utilizar el mecanismo cuantas veces lo desee la persona (jurídica o humana) involucrada en el proceso. El sesgo recaudatorio es clarísimo.

Queda claro que seguimos estando frente a una excusa absolutoria, un instituto del derecho de fondo, en contraposición con los mecanismos extintivos del [artículo 59 del Código Penal](#), que pese a encontrarse descriptos en dicha norma tienen naturaleza procesal.

Esto me permite conectar con lo que se prevé en el proyecto en cuanto a que la *reparación integral* regulada en el [artículo 59, inciso 6](#)), no resultará de aplicación al [Régimen Penal Tributario](#).<sup>[8]</sup>

En primera medida, parece ser claro que dicho instituto podrá ser aplicado a los procesos iniciados por delitos de retenciones indebidas y restantes de la ley penal tributaria, no expresamente enumerados en el artículo 16, como ya he sostenido en otras oportunidades<sup>[9]</sup>. Pero además, es una manifiesta contradicción con el mensaje de elevación que fundamenta el proyecto, en cuanto considera:

*"Se espera que este enfoque permita optimizar el uso de los recursos estatales al concentrar el poder punitivo en los casos de evasión significativa, reducir la litigiosidad penal improductiva e incentivar la regularización voluntaria mediante **mecanismos que privilegian la reparación del daño por sobre la punición**".*

Como ya ha sucedido con la pretensión de impedir el beneficio de la *probation* a los delitos tributarios, esta norma, de sancionarse, genera dispendio jurisdiccional y, al final del camino, luego de mucha incertidumbre, será declarada inconstitucional.

Una digresión antes de continuar: si el Ejecutivo pretende "*concentrar el poder punitivo en los casos de evasión significativa*", ¿por qué admite la extinción de la acción (o la obligación de no denunciar) ante el pago de las sumas evadidas en el caso de las evasiones agravadas? Una pregunta que solo tiene una respuesta: se sigue utilizando al derecho penal tributario, como una herramienta meramente atemorizante y recaudatoria, por ende, ilegítima (inconstitucional), calificativo que se ve confirmado porque la salida del proceso penal, cuando se encuentre en curso, como ya he afirmado, no tiene limitaciones.

El titular de la ARCA manifestó, en este sentido, que "*quien incumpla y sea notificado, podrá resolverlo pagando lo que debe*", añadiendo: "*Les vamos a dar a los ciudadanos todas las instancias necesarias para que normalicen su situación fiscal sin tener un problema penal*"<sup>[10]</sup>. Surge con claridad el objetivo meramente recaudatorio de la propuesta, pero que no encuentra racionalidad ni sistematicidad con la exclusión de la reparación integral a los delitos tributarios, ni con la imposibilidad de extinguir la acción penal -con la herramienta del art. 16- los delitos de retenciones indebidas, especialmente cuando ni en las declaraciones de los funcionarios ni en el mensaje de elevación se hacen referencias a esos tipos delictuales.

### 3. Limitaciones a la acción penal y sobre la no formulación de la denuncia

Se incorpora un supuesto especial y *sui generis* que impide la prosecución de la acción en el artículo 13 segundo agregado a continuación, una vez prescripta la facultad del organismo para determinar la deuda, lo que se encuentra relacionado con el acortamiento de los plazos de prescripción que se realizan en la ley de procedimiento tributario, como veremos más adelante.<sup>[11]</sup>

Creo que debe estudiarse con mucho detalle esta previsión normativa, pues en realidad se presenta como un mandato al Fisco de no presentar la denuncia penal en caso de que, aún abierto el plazo de prescripción del delito, la exigibilidad de la obligación tributaria se encuentre prescripta. Y digo que debe ser analizada con detenimiento pues no estoy muy seguro de que fiscales y jueces vayan a sentirse obligados por la misma. Pero además, la norma refiere que la acción "*no proseguirá*", y proseguir es un verbo transitivo que significa "*seguir, continuar*", con lo cual, la condición podría producirse con el proceso penal en curso, en cuyo caso, quienes deberían "no proseguir" la acción son los funcionarios judiciales.<sup>[12]</sup>

Finalizan las modificaciones a la LPT al agregarse supuestos en los cuales el Fisco no debe formular denuncia penal (art. 19)<sup>[13]</sup>. A las ya existentes, no verificación del hecho punible -por cuestiones de hecho o por divergencias interpretativas- y ajustes basados en presunciones, se adunan las siguientes:

- Cuando se hayan exteriorizado, informado formalmente al Fisco antes o concomitantemente con la presentación de las declaraciones juradas, el criterio adoptado por los contribuyentes para determinar las obligaciones tributarias, siempre que "*no resulte un medio orientado a tergiversar la base imponible*".

- Se presenten las declaraciones juradas originales y/o rectificativas antes de que exista una notificación de inicio de fiscalización en relación con el tributo y período fiscal de las mismas.

Esta última posibilidad nos remite de forma directa al mecanismo de la regularización espontánea regulado en el [artículo 16 de la anterior ley penal tributaria \(L. 24769\)](#), derogada en 2017 y sustituida por la actualmente vigente ([L. 27430](#)). El instituto de la regularización espontánea estuvo vigente de 2011 a 2017, y actualmente se encuentra receptado, para las multas, en el [artículo 49 de la ley 11683](#).

El otro supuesto, el vinculado a la información brindada a la Administración Tributaria sobre los criterios adoptados para determinar sus obligaciones, es claro que guarda estricta relación con lo decidido por nuestra Corte Suprema en la causa “Molinos”, en el año 2021, y tiene fundamento con las planificaciones fiscales -agresivas o no-, con todas las complejidades que ello traerá aparejado, especialmente cuando se analice la vinculación entre la información brindada y posible tergiversación del hecho imponible.

Lo que más llama la atención es que para no realizar la denuncia, en estos dos nuevos supuestos, no se exige una decisión fundada del Fisco, como sí para los que ya estaban en la norma. Pareciera ser que, verificados o invocados por los contribuyentes alguno de esos supuestos, no se realizará la denuncia penal, sin más. Entiendo que es absolutamente irrazonable esta discriminación, pudiendo provocar arbitrariedades.

#### **4. Una oportunidad desperdiciada**

Un proyecto de reforma serio e integral del [Régimen Penal Tributario](#) no podría hacerse el desentendido de abordar muchas otras cuestiones estructurales que deben ser revisadas de la ley vigente, y paso a enumerar solo algunas de ellas:

- Simplificar el conjunto de delitos, eliminando aquellos que tienen nula (o casi) aplicación práctica.
- Redefinidos los montos, como se propone, y llevándolos a supuestos que abarcan grandes evasiones, derogar el régimen de extinción de la acción penal por pago (o cancelación) de modo de eliminar el sesgo recaudatorio de la ley y darle un real objetivo represivo.
- Redefinir los alcances y contenidos de los delitos de retención indebida, para sancionar las conductas exclusivamente dolosas, y no las que configuran meros retardos en el ingreso. En este punto, es importante que se defina el bien jurídico tutelado.
- Eliminar, o al menos revisar, el delito de asociación ilícita fiscal.
- Derogar la prohibición de aplicar la *probation* a los delitos tributarios.
- Incluir al *compliance* fiscal de una forma más apropiada para el juzgamiento de las personas jurídicas.
- Eliminar la facultad de querellar en cabeza del Fisco Nacional, siguiendo los lineamientos de lo sucedido con la UIF.
- Definir la no vinculación entre el delito tributario con el de lavado de activos, es decir, dejarlo de lado como delito precedente.
- Adecuación de los aspectos procesales al nuevo [Código Procesal Penal Federal](#).

Parece quedar claro que, una vez más, se desperdicia una oportunidad para profundizar en las reformas que reclama el régimen.

## **II - REFORMAS A LA LEY DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO**

El proyecto, en los artículos 15 a 29, se ocupa de actualizar las multas fijadas en pesos, lo que era absolutamente necesario, en especial la ridícula sanción pecuniaria de \$ 200 y \$ 400 que se fijaba (art. 38) para personas humanas y jurídicas, respectivamente, por falta de presentación de las declaraciones juradas.

Dos críticas. La primera, que lamentablemente se sigue recurriendo a valores fijados en pesos, lo que me permite reiterar lo sostenido con relación al [Régimen Penal Tributario](#). La segunda: tampoco se

ha seguido un criterio uniforme en la actualización, pero lo más relevante es que parece que se han extralimitado en algunas actualizaciones, lo que podría implicar vulneraciones al principio de proporcionalidad de las penas.[14]

Los restantes cambios se verifican en materia de prescripción, modificando el artículo 56[15] y agregando uno sin número a continuación del mismo[16]. Estas propuestas guardan relación directa con la implementación que se hace al final del proyecto del Régimen de Declaración Simplificada en el impuesto a las ganancias.

En ese sentido, se reformula el régimen de prescripción y se reduce el plazo de cinco a tres años en aquellos casos en los que la declaración jurada haya sido presentada en término y no se verifiquen diferencias o discrepancias significativas.

El proyecto final define qué es “discrepancia significativa”:

- impugnaciones que arrojen saldos a favor del Fisco, una reducción de los quebrantos impositivos o de los saldos a favor, en porcentajes iguales o superiores al 15% respecto de lo declarado;
- si la diferencia entre lo declarado y lo ajustado supera la suma fijada para el delito de evasión simple, o
- si el ajuste se motiva en la utilización de facturas y otros documentos apócrifos.[17]

Un dato muy relevante y coherente con el objetivo buscado por el gobierno se establece en el artículo 41 del proyecto, que no modifica la [ley 11683](#) pero sí se refiere a la DSIG: a los efectos de evaluar si existe o no una discrepancia significativa, no resultan aplicables las presunciones del incremento patrimonial no justificado [art. 18, inc. f), LPTP].[18]

Normas similares se introducen en materia de recursos de la seguridad, reduciendo de diez a cinco el plazo de prescripción y con identidad en materia de “diferencias significativas”.

Finalizando las modificaciones a la LPTP, se propone eliminar el artículo sin número incorporado a continuación del artículo 65, que suspende por ciento veinte días el curso de la prescripción de las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos regidos por la presente ley y para aplicar y hacer efectivas las multas[19]. Esta eliminación también parece acertada, en pos de una relación jurídica tributaria más equilibrada y razonable, que reponga la paridad de armas de las partes.

### **III - MODIFICACIONES AL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN**

Esta propuesta, desde la perspectiva del principio de seguridad jurídica, es de resaltar, y se encuentra en línea con los precedentes jurisprudenciales de la Corte Nacional en la materia. Se prevé que, en materia de tributos establecidos por las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y/o los municipios, el término de la prescripción se regirá por lo dispuesto en la [ley 11683](#).[20]

Seguramente, las provincias, la CABA y los municipios cuestionarán esta norma por inmiscuirse en las autonomías locales.

### **IV - RÉGIMEN DE DECLARACIÓN JURADA SIMPLIFICADA EN EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS**

Quiero destacar, antes que nada, que valoro fervientemente cualquier intento de simplificación, coordinación, armonización y mayor razonabilidad en el sistema tributario. Es algo absolutamente necesario, y por lo cual venimos bregando hace tiempo.

En ese contexto, esta declaración simplificada, que regiría exclusivamente para personas humanas (y sucesiones indivisas) residentes en el país, puede constituir un avance, aunque creo que su objetivo no es simplificarle la vida a los contribuyentes del impuesto, sino que, junto con el resto de las normas que vengo refiriendo, encubre un neoblanqueo (o blanqueo indirecto).

Para poder efectuar la DSIG deben reunirse los siguientes requisitos, al 31 de diciembre del año inmediato anterior al de ejercer la opción, y durante los dos años fiscales anteriores:

- Ingresos totales (gravados, exentos y/o no gravados por el impuesto a las ganancias) de hasta \$ 1.000.000.000.
- Patrimonio total, conforme el impuesto a los bienes personales, de hasta \$ 10.000.000.000.
- No ser calificado por la ARCA como gran contribuyente nacional.[21]

El régimen permitirá a quienes se adhieran aceptar una declaración jurada simplificada que será propuesta por el Fisco y que, aceptada y cancelada, tendrá efectos liberatorios respecto del tributo y período involucrado, beneficio que se perderá en caso de detectarse el cómputo de deducciones improcedentes o utilización de facturas apócrifas[22]. Ahora bien, ¿cómo van a detectarse alguna de esas circunstancias si se han eliminado y/o reducido al mínimo los regímenes de información? Pero más allá de eso, nadie sabe cómo hará el Fisco para determinar cuáles son los gastos deducibles de un sujeto para poder hacer la propuesta de la declaración jurada.

Pero además, en dicho contexto, debería revisarse una cuestión trascendental, como es el accionar del Fisco en su categorización de la facturación apócrifa, que sabemos que pone en cabeza de los contribuyentes la prueba diabólica de acreditar que las facturas computadas no eran falsas, sino que estaban vinculadas a operaciones verdaderas. Sin una revisión de ello, los efectos liberatorios del pago de la DSI caerá en saco roto y se dispararán las discrepancias significativas.

El proyecto presume la exactitud de las declaraciones presentadas de ganancias e impuesto al valor agregado (IVA), salvo que se verifique una discrepancia significativa, en cuyo caso podrán desplegarse las facultades de verificación y fiscalización sobre los períodos no prescriptos.[23]

Nótese en este punto que, como ya sostuve, las discrepancias significativas que podrían hacer caer la adhesión al régimen simplificado de ganancias no incluyen a los incrementos patrimoniales no justificados.[24]

Por su parte, el proyecto prevé[25] los supuestos en los cuales el Fisco podrá extender la verificación y/o fiscalización a los períodos no prescriptos y, en su caso, determinar de oficio y aplicar sanciones, salvo que se haya optado, en un determinado período fiscal, por la modalidad simplificada y se haya cumplido con las condiciones allí establecida y hubieran adherido al Régimen de Regularización de Activos establecido en el Título II de la ley 27743.

## **V - SOBRE LA INVITACIÓN A ADHERIR**

En el artículo 43[26], la propuesta del Poder Ejecutivo Nacional invita a las provincias y a la CABA a adherir. Llamativamente, no lo hace respecto de las normas procesales del [Régimen Penal Tributario](#) que modifica (Tít. I) como debiera, sino que lo hace respecto de “regímenes simplificados de fiscalización”, en línea con las disposiciones establecidas en el Capítulo III del Título II, que es el referido a la DSI.

Es paradójica -inentendible en realidad- esta invitación, ya que las jurisdicciones locales a las cuales se invita no tienen potestades de verificación ni fiscalización sobre el impuesto a las ganancias, aun cuando se instrumente una modalidad simplificada de declaración y pago.

Pero visto el objetivo real que persigue el proyecto -instaurar un blanqueo indirecto-, tiene sentido como apoyo político, no jurídico. En este sentido, se entiende la advertencia (¿amenaza?) de que los gobernadores que no adhieran al proyecto perderán el acceso a datos cruciales, como la facturación de personas y empresas, así como la información relativa a consumos que superen los umbrales fijados en \$ 50.000.000.

## **VI - ALGUNAS CONCLUSIONES**

Este proyecto de “inocencia fiscal”, lejos de ser inocente o de proteger a los inocentes contribuyentes frente al Fisco, y si bien entremezclado con algunas pocas propuestas de reforma interesantes, aunque perfectibles, lo que pretende instaurar es un blanqueo indirecto, sin decir que lo es, con el objetivo de volcar dólares en el circuito económico y paliar las deficiencias que en esa materia tiene la economía argentina. Es evidente que el blanqueo del año pasado, el préstamo del Fondo Monetario Internacional de abril/2025 y la deuda de USD 1.000.000.000 tomada con el Bono BONTE

2030 recientemente (a una elevadísima tasa del 29,5%[\[27\]](#)) no han satisfecho las expectativas del gobierno nacional, por ello esta iniciativa.

Para ello, se posibilita que los contribuyentes puedan sacar y gastar los ahorros en dólares guardados en sus colchones (cajas de seguridad o cuentas ocultas en el exterior) sin consecuencias tributarias y/o penales tributarias.

La declaración jurada simplificada, con la presunción de exactitud de las declaraciones juradas en ganancias e IVA, viene a operar como un pseudo tapón fiscal, ya que el Fisco no podrá inmiscuirse en los gastos de los contribuyentes, sino que los montos a pagar surgirán de los ingresos declarados. Bloqueos fiscales ya tuvimos en nuestra normativa, también “presunciones de exactitud” [\[D. \(PEN\) 573/1996\]](#) a la postre derogados, aunque su implementación puede ser positiva en algunos casos.

Nótese en este punto que las discrepancias significativas que podrían hacer caer la adhesión al régimen simplificado de ganancias no incluyen a los incrementos patrimoniales no justificados.

La intención es muy clara, a tal punto que el comunicado oficial del 5 de junio de la Oficina del Presidente dice, textualmente, en referencia al Régimen Simplificado, que *“se estará blindando a los argentinos de bien que adhieran ... mediante el cual cada ciudadano **podrá normalizar su situación patrimonial pagando ganancias solo por la facturación efectuada e independientemente de su variación patrimonial**”*.

La [resolución general \(ARCA\) 5704](#), del 30 de mayo, que reglamenta esta declaración simplificada - increíblemente antes de que exista una ley- establece, en su artículo 1, en línea con lo anterior, que quienes se adhieran quedarán exceptuados de cumplir con la obligación de informar su patrimonio.

No hay dudas, el pseudo principio de inocencia fiscal camufla un blanqueo. Sin rodeos, estamos frente a esa situación, más allá de algunas otras reformas cosméticas que se proponen. Parece ser un blanqueo de consumos, pero pretende ser un blanqueo de bienes, cuando vemos que especialmente se elimina toda consideración a los incrementos patrimoniales no justificados como circunstancias que disparan el concepto “discrepancias significativas”. Creo que esa definición no blindará, de modo alguno, a quienes adquirieran bienes registrables, los cuales estarán a la vista del Fisco y, sin duda, dispararán fiscalizaciones y posteriores ajustes, aun cuando se hayan declarado por medio de la DSI. Tampoco serviría de nada, en esos supuestos, el “efecto liberatorio del pago” del régimen simplificado que propone el proyecto.

La normativa no lo señala claramente, y debería hacerlo. De hecho, hasta lo oculta, al menos para quienes no son entendidos en la materia. Pero de esto se trata, de un nuevo blanqueo, que sigue beneficiando a quienes han evadido impuestos y tienen dólares (o pesos) sin declarar, pues el eufemismo “en el colchón” implica que no están expuestos en sus declaraciones juradas, es decir, que sobre esos ingresos no se pagaron impuestos. Lejos de ser héroes o personas de bien, son sujetos que incumplieron sus obligaciones tributarias, por los motivos que fuere, a quienes hoy se pretende beneficiar, una vez más, permitiéndoles gastar esas sumas dinerarias no declaradas, sin consecuencias, ideándose para ello un sistema de declaración jurada simplificada.

No se avizora seguridad jurídica para quienes gasten (inviertan) sus ahorros no declarados, aun cuando se sancione este proyecto tal cual ha sido enviado por el Poder Ejecutivo. Tiene más oscuros que claros. Y este proyecto, como no es sino un blanqueo encubierto, no prevé, como debería de sincerarse, una amnistía para quienes cometieron delitos tributarios (y cambiarios), que sería la única forma de arrojar verdaderas garantías (seguridad jurídica) a quienes decidan usar los “dólares en el colchón”.

Parece complicado que el proyecto, al menos tal como está, se apruebe en el Congreso, aunque sí parece seguro que, de tratarse, tendremos arduos debates en las Comisiones y en el pleno.

En este contexto, desde el Observatorio de Derecho Penal Tributario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, reafirmamos nuestra plena disposición a colaborar mediante la elaboración y presentación de aportes técnicos y académicos que contribuyan a enriquecer el análisis de las propuestas en discusión. Confiamos en que este espacio de conocimiento y reflexión sea tenido en cuenta, y que las reformas que se impulsen respondan a criterios de legalidad,

coherencia normativa, eficiencia institucional y respeto por los principios constitucionales que rigen en materia penal y tributaria. Esperamos ser escuchados.

[1] Este artículo es una ampliación de la nota periodística publicada el domingo 8 de junio en Perfil (Álvarez Echagüe, Juan Manuel: 'Comentarios, breves y rápidos, al proyecto de 'Inocencia Fiscal'. Un blanqueo encubierto' - [www.perfil.com/noticias/politica/comentarios-breves-y-rapidos-al-proyecto-de-inocencia-fiscal-un-blanqueo-encubierto.phtml](http://www.perfil.com/noticias/politica/comentarios-breves-y-rapidos-al-proyecto-de-inocencia-fiscal-un-blanqueo-encubierto.phtml))

[2] "Menos controles en ahorros, pagos e impuestos: el plan oficial para 'devolverle la libertad a la gente" - El Cronista - 22/5/2025 - Nota disponible en [www.cronista.com/economia-politica/el-gobierno-anuncia-las-medidas-para-incentivar-el-uso-de-los-dolares-del-colchon/](http://www.cronista.com/economia-politica/el-gobierno-anuncia-las-medidas-para-incentivar-el-uso-de-los-dolares-del-colchon/)

[3] Al tipo de cambio del 9/6/2025 (\$ 1.150), la evasión simple, medida en dólares, se configurará cuando se superen los USD 87.000, y la agravada, los USD 870.000

[4] "Sobre el proyecto de reforma de la ley en materia de lavado de activos" - Observatorio de derecho penal tributario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires - 9/6/2023. Ver en [www.derecho.uba.ar/institucional/observatorio-derecho-penal-tributario/documentos/2023-pronunciamiento-sobre-el-proyecto-de-reforma-en-materia-de-lavado-de-activos.pdf](http://www.derecho.uba.ar/institucional/observatorio-derecho-penal-tributario/documentos/2023-pronunciamiento-sobre-el-proyecto-de-reforma-en-materia-de-lavado-de-activos.pdf)

[5] 'El Gobierno envió al Congreso el Proyecto del Principio de Inocencia Fiscal' - Argentina.gob.ar - 5/6/2025. Ver [www.argentina.gob.ar/noticias/el-gobierno-envio-al-congreso-el-proyecto-del-principio-de-inocencia-fiscal](http://www.argentina.gob.ar/noticias/el-gobierno-envio-al-congreso-el-proyecto-del-principio-de-inocencia-fiscal)

[6] *"Art. 16 - En los casos previstos en los artículos 1, 2, 3, 5 y 6 la Administración Tributaria no formulará denuncia penal cuando el importe correspondiente a las obligaciones evadidas, aprovechadas o percibidas indebidamente y sus intereses fueren cancelados en forma incondicional y total con anterioridad a la formulación de la denuncia. La limitación de formular la denuncia penal se otorgará por única vez por cada persona humana o jurídica obligada.*

*Respecto de los delitos mencionados en el párrafo anterior, y para el supuesto de haberse iniciado la acción penal, esta se extinguirá si se aceptan y cancelan en forma incondicional y total las obligaciones evadidas, aprovechadas o percibidas indebidamente y sus intereses, más un importe adicional equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la suma total, hasta dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores al acto procesal por el cual se notifique fehacientemente la imputación penal que se le formula"*

[7] Álvarez Echagüe, Juan Manuel: "La extinción de la acción penal tributaria" - Ed. Ad-Hoc - Bs. As. - 2018 - pág. 388

[8] *"Art. 12 - Incorpórase como primer artículo sin número a continuación del artículo 16 del Régimen Penal Tributario, establecido por el Título IX de la ley 27430, el siguiente: 'Art. ... - La modalidad de extinción de la acción penal regulada en el artículo 59, inciso 6), del Código Penal de la Nación (L. 11179, t.o. 1984 y modif.) no resultará de aplicación al Régimen Penal Tributario"*

[9] Álvarez Echagüe, Juan Manuel: "La extinción de la acción penal tributaria" - Ed. Ad-Hoc - Bs. As. - 2018 - pág. 376 y ss.

[10] Conf. 'El Gobierno envió al Congreso el Proyecto del Principio de Inocencia Fiscal' - Argentina.gob.ar - 5/6/2025. Ver [www.argentina.gob.ar/noticias/el-gobierno-envio-al-congreso-el-proyecto-del-principio-de-inocencia-fiscal](http://www.argentina.gob.ar/noticias/el-gobierno-envio-al-congreso-el-proyecto-del-principio-de-inocencia-fiscal)

[11] *"Art. 13 - Incorpórase como segundo artículo sin número a continuación del artículo 16 del Régimen Penal Tributario, establecido por el Título IX de la ley 27430, el siguiente: 'Art. ... - La acción penal tributaria y de los recursos de la seguridad social no proseguirá cuando se encuentren prescriptas las facultades del organismo recaudador para determinar los respectivos tributos y los recursos de la seguridad social, conforme la normativa aplicable"*

[12] Conf. definición del Diccionario de la Real Academia Española - <https://dle.rae.es/proseguir>

[13] "Art. 19 - El organismo recaudador no formulará denuncia penal cuando: a) Surgiere de manera manifiesta que no se ha verificado la conducta punible, ya sea por las circunstancias del hecho o por mediar un comportamiento del contribuyente o responsable que permita entender que el perjuicio fiscal obedece a diferencias de criterio vinculadas con la interpretación normativa o aspectos técnico-contables de liquidación. Exclusivamente a estos efectos, podrá tenerse en consideración el monto de la obligación evadida en relación con el total de la obligación tributaria del mismo período fiscal. b) Las obligaciones tributarias o previsionales ajustadas, sean el resultado exclusivo de aplicación de las presunciones previstas en las leyes de procedimiento respectivas, sin que existieren otros elementos de prueba conducentes a la comprobación del supuesto hecho ilícito. c) Los contribuyentes y/o responsables hayan exteriorizado en forma fundada y debidamente justificada el criterio interpretativo y/o técnico-contable de liquidación utilizado para determinar la obligación tributaria, mediante una presentación formal ante organismo recaudador, con anterioridad o de forma simultánea a la presentación de la respectiva declaración jurada, siempre que el criterio invocado no resulte un medio orientado a tergiversar la base imponible. d) Los contribuyentes y/o responsables presenten las declaraciones juradas originales y/o rectificativas antes de que exista una notificación de inicio de fiscalización en relación con el tributo y período fiscal a que refieran esas declaraciones juradas presentadas. En los supuestos de los incisos a) y b), la determinación de no formular la denuncia penal deberá ser adoptada mediante decisión fundada con dictamen del correspondiente servicio jurídico por los funcionarios a quienes se les hubiese asignado expresamente esa competencia y siguiendo el procedimiento de contralor que al respecto se establezca en la reglamentación"

[14] A modo de ejemplo, la sanción máxima por no presentar el informe país por país pasa de tener un mínimo de \$ 600.000 y un máximo de \$ 900.000 a \$ 45.000.000 y \$ 67.500.000, respectivamente.

"Art. 25 - Sustitúyese en el inciso b) del segundo artículo sin número incorporado a continuación del artículo 39 de la ley 11683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, las expresiones 'seiscientos mil pesos (\$ 600.000)' por 'pesos cuarenta y cinco millones (\$ 45.000.000)' y 'novecientos mil pesos (\$ 900.000)' por 'pesos sesenta y siete millones quinientos mil (\$ 67.500.000)"

[15] "Art. 56 - Las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos regidos por la presente ley, y para aplicar y hacer efectivas las multas y clausuras en ella previstas, prescriben: a) Por el transcurso de cinco (5) años en el caso de contribuyentes inscriptos, como también en el caso de contribuyentes no inscriptos que no tengan obligación legal de inscribirse ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero o que, teniendo esa obligación y no habiéndola cumplido, regularicen espontáneamente su situación. Este plazo se reducirá a tres (3) años cuando el contribuyente inscripto hubiera cumplido en término con la presentación de la declaración jurada correspondiente y, en su caso, hubiera regularizado el saldo resultante, siempre que el organismo recaudador no impugne la declaración jurada presentada por detectar una discrepancia significativa entre la información declarada y la información disponible en sus sistemas o proporcionada por terceros. b) Por el transcurso de diez (10) años en el caso de contribuyentes no inscriptos. c) Por el transcurso de cinco (5) años, respecto de los créditos fiscales indebidamente acreditados, devueltos o transferidos, a contar desde el 1 de enero del año siguiente a la fecha en que fueron acreditados, devueltos o transferidos. La acción de repetición de impuestos prescribe por el transcurso de cinco (5) años. Prescribirá a los cinco (5) años la acción para exigir el recupero o devolución de impuestos. El término se contará a partir del 1 de enero del año siguiente a la fecha desde la cual sea procedente dicho reintegro. La prescripción de las acciones y poderes del Fisco con relación al cumplimiento de las obligaciones impuestas a los agentes de retención y percepción se produce a los cinco (5) años, contados a partir del 1 de enero siguiente al año en que ellas debieron cumplirse. Igual plazo de cinco (5) años rige para aplicar y hacer efectivas las sanciones respectivas"

[16] "Art. ... - A los fines de lo dispuesto en el inciso a) del artículo anterior, se considerará que existe una discrepancia significativa cuando se verifique, al menos, una de las siguientes condiciones: (i) Si de la impugnación realizada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero resultare un incremento de los saldos de impuestos a favor del organismo o, en su caso, una reducción de los quebrantos impositivos o de los saldos a favor de los contribuyentes o responsables, por un

porcentaje no inferior al quince por ciento (15%) respecto de lo que hubiera declarado el contribuyente. (ii) Si la diferencia entre el impuesto declarado y el impuesto que resulte como consecuencia de la impugnación realizada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero supere la suma fijada en el artículo 1 del Régimen Penal Tributario, establecido por el Título IX de la ley 27430. (iii) Si de la impugnación realizada por el organismo recaudador con motivo de la utilización de facturas y otros documentos apócrifos, resulta un incremento del saldo de impuesto a favor del Fisco o, en su caso, una reducción de los quebrantos impositivos o de los saldos a favor de los contribuyentes o responsables"

[17] "Art. 31 - Incorporáse como primer artículo sin número a continuación del artículo 56 de la ley 11683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, el siguiente: 'Art. ... - A los fines de lo dispuesto en el inciso a) del artículo anterior, se considerará que existe una discrepancia significativa cuando se verifique, al menos, una de las siguientes condiciones: (i) Si de la impugnación realizada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero resultare un incremento de los saldos de impuestos a favor del organismo o, en su caso, una reducción de los quebrantos impositivos o de los saldos a favor de los contribuyentes o responsables, por un porcentaje no inferior al quince por ciento (15%) respecto de lo que hubiera declarado el contribuyente. (ii) Si la diferencia entre el impuesto declarado y el impuesto que resulte como consecuencia de la impugnación realizada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero supere la suma fijada en el artículo 1 del Régimen Penal Tributario, establecido por el Título IX de la ley 27430. (iii) Si de la impugnación realizada por el organismo recaudador con motivo de la utilización de facturas y otros documentos apócrifos, resulta un incremento del saldo de impuesto a favor del Fisco o, en su caso, una reducción de los quebrantos impositivos o de los saldos a favor de los contribuyentes o responsables"

[18] "Art. 41 - Exclusión. A los efectos de evaluar si existe o no la discrepancia significativa a la que se refiere el artículo anterior, respecto del impuesto a las ganancias y del impuesto al valor agregado, no serán aplicables las disposiciones del inciso f) del artículo 18 de la ley 11683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones"

[19] "Art. 32 - Derógase el artículo sin número incorporado a continuación del artículo 65 de la ley 11683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones"

[20] "Art. 33 - Sustitúyese el artículo 2532 del Código Civil y Comercial de la Nación por el siguiente: 'Art. 2532 - Ámbito de aplicación. En ausencia de disposiciones específicas, las normas de este Capítulo son aplicables a la prescripción adquisitiva y liberatoria'.

Art. 34 - Sustitúyese el artículo 2560 del Código Civil y Comercial de la Nación por el siguiente: 'Art. 2560 - Plazo genérico. Las acciones civiles derivadas de delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. El plazo de la prescripción es de cinco (5) años, excepto que esté previsto uno diferente en la legislación local. En materia de tributos establecidos por las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o los municipios, el término de la prescripción se regirá por lo dispuesto en la ley 11683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, o en la norma que en el futuro la sustituya"

[21] "Art. 38 - Las disposiciones del presente Capítulo serán aplicables a las personas humanas y sucesiones indivisas, residentes en el país, que opten por la modalidad simplificada de declaración jurada del impuesto a las ganancias que implemente la Agencia de Recaudación y Control Aduanero que, al 31 de diciembre del año inmediato anterior al de ejercer la opción, y durante los dos (2) años fiscales anteriores a aquel, verifiquen concurrentemente las siguientes condiciones: a) ingresos totales, gravados, exentos y/o no gravados por el impuesto a las ganancias, de hasta pesos mil millones (\$ 1.000.000.000); b) patrimonio total, entendiendo como tal a la sumatoria de los bienes en el país y en el exterior, gravados, exentos y/o no gravados por el impuesto sobre los bienes personales, de hasta pesos diez mil millones (\$ 10.000.000.000), y c) no califiquen como 'grandes contribuyentes nacionales' a criterio de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. El Poder Ejecutivo Nacional podrá establecer requisitos adicionales a los previstos precedentemente. En caso de que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero verifique que el contribuyente no reunía, en oportunidad de su adhesión a la modalidad simplificada de declaración jurada del impuesto a las ganancias, los requisitos establecidos para ejercer esa opción, el organismo recaudador lo excluirá

*del régimen, y quedará habilitado a llevar adelante las tareas de verificación y/o fiscalización pertinentes respecto de los períodos no prescriptos, determinar de oficio la materia imponible, practicar la liquidación de las diferencias que pudieren corresponder y aplicar, en su caso, las sanciones pertinentes, conforme a lo establecido en la ley 11683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones"*

**[22]** *"Art. 39 - Efecto liberatorio del pago. Una vez que el sujeto, habiendo optado por esta modalidad simplificada, acepte el contenido de la declaración jurada propuesta por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, y efectivice su pago en término, de corresponder, se considerarán satisfechas sus obligaciones en concepto de impuesto a las ganancias del período fiscal en cuestión tanto desde el punto de vista formal como material, lo que implica que el contribuyente gozará del efecto liberatorio del pago con relación a ese tributo y período fiscal excepto que, con posterioridad, se verifique la omisión en la declaración de ingresos o el cómputo de una deducción improcedente y/o la utilización de facturas u otros documentos que resultaren apócrifos"*

**[23]** *"Art. 40 - Presunción de exactitud. Se presumirá, sin admitir prueba en contrario, la exactitud de las declaraciones juradas presentadas del impuesto a las ganancias y del impuesto al valor agregado correspondientes a los períodos no prescriptos, excepto que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero impugne, por los motivos indicados en el artículo anterior, la declaración jurada simplificada correspondiente al último período fiscal declarado y detecte una discrepancia significativa entre la información declarada y la información disponible en sus sistemas o proporcionada por terceros. Esta presunción de exactitud se extenderá a los períodos no prescriptos en los que el contribuyente no hubiera estado obligado a presentar dichas declaraciones juradas.*

*A los fines de lo dispuesto en el párrafo anterior, se considerará que existe una discrepancia significativa cuando se verifique, al menos una, de las siguientes condiciones: (i) Si de la impugnación realizada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero resultare un incremento de los saldos de impuestos a favor del organismo o, en su caso, una reducción de los quebrantos impositivos o de los saldos a favor de los contribuyentes o responsables, por un porcentaje no inferior al quince por ciento (15%) respecto de la declarada por el contribuyente. (ii) Si la diferencia entre el impuesto declarado y el impuesto que resulte como consecuencia de la impugnación realizada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero supera la suma establecida en el artículo 1 del Régimen Penal Tributario, inserto en el Título IX de la ley 27430. (iii) Si de la impugnación realizada por el organismo recaudador con motivo de la utilización de facturas y otros documentos apócrifos resulta un incremento del saldo de impuesto a favor del Fisco o, en su caso, una reducción de los quebrantos impositivos o de los saldos a favor de los contribuyentes o responsables, siempre que estos no rectifiquen la declaración jurada impugnada por esa circunstancia y no ingresen la diferencia de impuesto que pudiera corresponder, con más sus intereses"*

**[24]** *"Art. 41 - Exclusión. A los efectos de evaluar si existe o no la discrepancia significativa a la que se refiere el artículo anterior, respecto del impuesto a las ganancias y del impuesto al valor agregado, no serán aplicables las disposiciones del inciso f) del artículo 18 de la ley 11683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones"*

**[25]** *"Art. 42 - Extensión de la fiscalización. En caso de que se verifique la situación de excepción prevista en el primer párrafo del artículo 40 de la presente ley -esto es, cuando la Agencia de Recaudación y Control Aduanero impugne la declaración jurada simplificada por existir una discrepancia significativa entre la información declarada y la información disponible en sus sistemas o proporcionada por terceros-, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero podrá extender la verificación y/o fiscalización a los períodos no prescriptos y, en su caso, determinar de oficio la materia imponible, liquidar las diferencias impositivas correspondientes y aplicar las sanciones previstas en la ley 11683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones. No obstante, la extensión de la verificación y/o fiscalización a los períodos no prescriptos no resultará procedente respecto de los contribuyentes o responsables que: (i) Hayan optado, en un determinado período fiscal, por la modalidad simplificada prevista en el artículo 38 de la presente ley, en tanto hayan cumplido con las condiciones allí establecidas y gocen, respecto de los períodos no prescriptos, del efecto liberatorio*

*de pago y de la presunción de exactitud, conforme lo previsto en los artículos 39 y 40, respectivamente, cuando en un período fiscal posterior no se encuentren comprendidos por dicha modalidad. (ii) Hayan adherido al Régimen de Regularización de Activos establecido en el Título II de la ley 27743, y por los períodos que resulten comprendidos en las previsiones de su artículo 34, en tanto se cumplimenten, a esos efectos, las condiciones establecidas por dicha norma legal"*

[26] "Art. 43 - Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adoptar, en el ámbito de sus respectivas competencias, regímenes simplificados de fiscalización, en línea con las disposiciones establecidas en el Capítulo III del Título II de la presente ley"

[27] Conf. Castillo, Gonzalo A.: 'El nuevo Bonte 2030, con alta tasa, ¿qué tan cerca está el regreso al mercado internacional?' - Forbes - 29/5/2025 - [www.forbesargentina.com/money/el-nuevo-bonte-2030-alta-tasa-que-tan-cerca-esta-regreso-mercado-internacional-n73063](http://www.forbesargentina.com/money/el-nuevo-bonte-2030-alta-tasa-que-tan-cerca-esta-regreso-mercado-internacional-n73063)